

# Las tres fases del gobierno de Lula: En busca de la coalición de gobierno

*Por Matías Franchini*

## DOCUMENTOS

La intención de este trabajo es hacer una breve caracterización de la evolución de las relaciones entre el gobierno de Lula y ese cúmulo de fuerzas políticas en la búsqueda de esa coalición amplia y sólida, que parece requisito esencial para la gobernabilidad en el Brasil contemporáneo. Para ello, se han dividido los más de dos años de administración petista en tres fases, cada una de las cuales corresponde a un esquema de relación diferente entre el Poder Ejecutivo y sus socios políticos. Mientras las dos primeras fases han finalizado, y exhiben características propias relativamente fáciles de delimitar, la tercera está apenas comenzando, y tiene como único elemento identificable la necesidad de repensar las bases de esa relación.

**Matías Franchini** es Lic. en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales (UCA) y Coordinador Editorial de Paper Latinoamericano (CADAL).



El Partido de los Trabajadores ha cumplido dos años en la presidencia de Brasil y lejos han quedado aquellos días en los que la sola mención de esta posibilidad despertaba recelos, cuando no pánico, en amplios sectores de la sociedad brasileña y en buena parte de la comunidad internacional. La marcha de la administración del Presidente Lula ha echado por tierra estos temores y ha convertido al mayor país de Sudamérica en el nuevo favorito entre los organismos e instituciones que analizan las perspectivas de los países en desarrollo. El compromiso del nuevo gobierno con las reformas iniciadas en el periodo anterior, su agresiva política de austeridad fiscal, la defensa a ultranza de las metas de inflación y la decisión de hacer caso omiso a las exigencias radicales de sectores corporativos cercanos a la historia del PT, han sorprendido incluso a aquellos que creyeron que la “Carta al Pueblo brasileño” constituía un cambio real con respecto a las ideas y prácticas defendidas por el partido desde su creación a principios de la década del 80. Esta virtual “violación” de los preceptos históricos de la fuerza de raíz sindical parece estar dando resultados, por lo menos en el corto plazo: la administración Lula logró apartar la amenaza de crisis financiera que sobre ella se cernía en los primeros meses de su mandato y, pasada la tormenta, ha logrado un crecimiento nada despreciable en 2004, con mejoras en materia de empleo, renta, exportaciones, relación deuda PBI, riesgo país, etc.

En materia internacional, el gobierno del PT también ha sido un actor responsable, a la vez que ha mantenido la fidelidad a algunos de sus preceptos históricos. La relación especial con Argentina y Mercosur, la opción por la integración sudamericana y la creación o profundización de vínculos estratégicos con otros países en desarrollo conviven con una relación estable con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con las principales potencias mundiales. El comportamiento internacional de la administración Lula muestra claras líneas de continuidad con la diplomacia de Fernando Enrique Cardoso, aunque la intención de convertir a Brasil en un actor global de importancia parece ser más evidente en el gobierno del PT, siempre bajo los cánones de un comportamiento civilizado. En cuanto a la trayectoria política del gobierno en estos dos años inaugurales, puede decirse que ha sido positiva. Lula no ha enfrentado problemas serios de gobernabilidad en este tiempo y, a su vez, ha logrado la consecución de una serie de objetivos contundentes, sobre todo en el primer año. El trámite positivo de las reformas constitucionales en materia provisional y tributaria son evidencia de ello. Sin embargo, su agenda también ha conocido derrotas y dilaciones, producto de la errática relación con las fuerzas políticas que le sirven de sustento.

Cabe en este punto hacer una observación de importancia para el objeto de este Documento y es que el gobierno del PT no parece encontrar la fórmula para la formación de una coalición de gobierno lo suficientemente sólida y estable

como para asegurar el tránsito positivo de sus iniciativas programáticas y, eventualmente, asegurar la reelección de Lula en 2006.

La intención de este trabajo es hacer una breve caracterización de la evolución de las relaciones entre el gobierno de Lula y ese cúmulo de fuerzas políticas en la búsqueda de esa coalición amplia y sólida, que parece requisito esencial para la gobernabilidad en el Brasil contemporáneo. Para ello, se han dividido los algo más de dos años de administración petista en tres fases, cada una de las cuales corresponde a un esquema de relación diferente entre el Poder Ejecutivo y sus socios políticos. Mientras las dos primeras fases han finalizado, y exhiben características propias relativamente fáciles de delimitar, la tercera está apenas comenzando, y tiene como único elemento identificable la necesidad de repensar las bases de esa relación.

### **Las características del sistema: necesidad de una coalición, dificultad de una coalición.**

Para dar una pequeña idea de los desafíos que enfrenta el gobierno de Lula (de hecho cualquier gobierno desde la re-democratización en 1985) a la hora de conformar una alianza de gobierno sólida y estable, cabe resaltar algunos elementos estructurales del sistema político brasileño. La característica principal del sistema parece ser la fragmentación, la dispersión del poder político, distintas instancias institucionales y actores políticos.

Esta extrema fragmentación del poder político limita el ejercicio de las capacidades institucionales del Poder Ejecutivo y lo obliga a establecer canales de comunicación y negociación con los demás poderes para asegurar, primero, un mínimo nivel de gobernabilidad y para viabilizar, en segundo término, su plan de gobierno. En este camino de búsqueda de base de sustento el interlocutor principal es el Congreso federal, sin cuya colaboración es virtualmente imposible avanzar en cualquier sentido. Pero en este punto, la dificultad de esa comunicación reside en la enorme diversidad de intereses representados en la sede legislativa: dado que las características propias del sistema electoral conllevan una sobredimensión de la representación de los intereses estatales, regionales y particulares. Según señala José A. Guilhon Albuquerque<sup>2</sup>, la combinación de factores institucionales (presidencialismo y el sistema electoral) y socioeconómicos (la convivencia de un Brasil moderno de base urbana y un Brasil más atrasado de sustrato mayormente rural) conducen a una doble mayoría que no siempre coincide y que a menudo se disputa la representación legítima del electorado: una mayoría presidencial, que representa a los sectores medios y populares principalmente urbanos, y la mayoría legislativa que tiende a representar pequeñas bases de población e intereses corporativos. Si bien sería demasiado simplista afirmar que el esquema institucional brasileño conduce a la elección de un Presidente con un

mandato más “progresista” o de mayor compromiso reformador y un Congreso de tendencia más conservadora (en virtud de los electorados a quienes representa), lo cierto es que, desde la última democratización, a los presidentes les ha costado mucho imponer sus ideas e iniciativas en la sede legislativa.

Esta dificultad estructural para conseguir consensos amplios en el Congreso, se ve agravada a su vez por la fragilidad del sistema de partidos. Las muchas fuerzas políticas brasileñas aparecen fragmentadas, divididas regionalmente y muy pocas de ellas gozan de alcance nacional. Carecen sus miembros no sólo de disciplina, por lo que es común que las directivas de las autoridades partidarias no sean seguidas, sino de identidad partidaria, por lo que no es raro ver incluso a dirigentes de primer nivel navegando entre las distintas fuerzas de acuerdo a la dirección del viento. En este marco, resulta en extremo difícil para el Poder Ejecutivo forjar lazos estables con los distintos partidos.

Apoyándonos nuevamente en Albuquerque<sup>3</sup>, puede decirse que hay dos estrategias básicas para la formación de una mayoría que permita gobernar Brasil y motorizar las iniciativas del Poder Ejecutivo: la primera de ellas es la formación de una mayoría ad hoc, construida a través de acuerdos específicos con distintos actores políticos de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo y a la evolución de la agenda de gobierno. Esta estrategia es, a criterio del autor, compatible con la gobernabilidad, dado que el Poder Ejecutivo cuenta con una serie de instrumentos que le permiten ganar la adhesión de los legisladores (liberación de partidas presupuestarias y otras prácticas denominadas genéricamente como fisiologismo). Sin embargo, depende en demasía de la popularidad del Presidente. A medida que la aprobación popular del presidente vaya disminuyendo, mayor será la reticencia de los legisladores a apoyarlo, acentuando aún más el círculo vicioso de la impopularidad. Por otro lado, la segunda estrategia se basa en captar adhesión de otros actores políticos en forma más sólida y permanente, a través de la formación de una verdadera coalición sustentada en un poder compartido y un programa político consensuado. El establecimiento de esta alianza de gobierno daría una base sólida a los acuerdos, facilitando la relación entre el Poder Ejecutivo y su base y beneficiando de esta manera al esquema de gobernabilidad. Sin embargo, en este caso, el Poder Ejecutivo, como motor y garante de la coalición, debe estar dispuesto a ceder parte de sus atribuciones y poder en beneficio de los nuevos socios.

Suele presentarse como ejemplo claro de alianza de gobierno exitosa la que pudo conformar el Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002); que le permitió no sólo gobernar ocho años, sino también, motorizar uno de los procesos de reforma más profundos de la historia de Brasil. Tanto Lula como sus operadores parecen ser concientes de la necesidad estructural de reproducir una

experiencia similar, aunque por el momento y como dijimos, no parece encontrar la fórmula.

### Fase uno: El poder no se comparte

La primera etapa en las relaciones entre el gobierno y la base coincide básicamente con el primer año de mandato (2003) y se extiende desde la asunción de Lula hasta el recambio de gabinete en enero de 2004. Esta etapa está caracterizada por un esquema de relación poco institucionalizado y flexible, cercano a la idea antes planteada de mayoría ad hoc, en la que el PT es reacio a compartir el poder con otras fuerzas políticas para lograr su adhesión. Esto puede verse claramente en la conformación del primer gabinete. Allí, doce de los veinticuatro ministros pertenecían al PT, siete carteras correspondieron a los otros tantos partidos que acompañaron a Lula en la primera y/o en la segunda vuelta electoral (PDT, PL, PV, PSB, PPS, PTB y PC do B) y cinco fueron a parar a candidatos independientes. Si bien es cierto que el PT compartió lugares en la administración con sus socios electorales, la presencia de estos comparada con la del PT es pequeña y, además, como hacer notar Vicente Palermo<sup>4</sup>, si se compara la composición de este gabinete con la del Senado y la Cámara Baja, se verá que el número de los mismos no es ni remotamente cercano al necesario para aprobar reformas, o siquiera para sancionar legislación común. Esta extrema representación del PT, que fue en detrimento de la participación de potenciales socios como el PMDB y el PPS, ha sido objeto de diversas explicaciones, que van desde la necesidad de mantener unido al heterogéneo partido en los turbulentos inicios de la administración (agregar disputas internas en el seno de un partido conocido por su disciplina al ya complicado ambiente económico y político hubiera sido poco menos que suicida) hasta la falta de experiencia del Partido de los Trabajadores a la hora de manejar los resortes del poder en la máxima instancia política (a diferencia de los otros grandes partidos de Brasil, el PT nunca participo de coalición alguna y se mantuvo siempre en la oposición).

Lo cierto es que aún renuente a ceder posiciones de poder, el gobierno de Lula logró ampliar su base apoyo en el Congreso. La incorporación del PMDB y del PP a la coalición de gobierno sobre mediados de 2003 incrementó en gran forma el número de legisladores oficialistas, haciendo casi intrascendente el alejamiento del PDT de Leonel Brizola, que se produjo también por esos meses. A su vez, el proceso de “migración legislativa” que es común al inicio de cada nueva administración federal también acrecentó las filas de los socios políticos del Planalto: más de un centenar de diputados abandonaron sus partidos de origen para sumarse a la coalición de gobierno entre enero y septiembre de 2003. Por aquellos días, la inmensa popularidad de Lula obraba como un imán para los dirigentes políticos brasileños (Según los datos de la encuesta CNT/Sensus, Lula comenzó su mandato con un nivel de aprobación de 83.6% y terminó

su primer año apenas por debajo de 70%).

Los resultados en esta primera etapa de gobierno fueron positivos, Lula y sus operadores encontraron apoyo para insistir en la implementación de medidas impopulares que tenían como objetivo estabilizar la economía a la vez que se lograban en el ámbito del Congreso aprobar con éxito dos reformas constitucionales de importancia: la reforma previsional y la reforma tributaria. La relación con las fuerzas políticas en el ámbito del Congreso, así como la positiva articulación política con los gobernadores, parecía asegurar la marcha de la agenda de gobierno.

Sin embargo y sobre fines de aquel 2003, los partidos de la base redoblaron la presión que habían venido ejerciendo sobre el gobierno para participar de manera más clara en la gestión de gobierno. El caso arquetípico fue el del PMDB, que ansiaba ver traducido su apoyo de seis meses a la administración Lula (especialmente su vital sustento a las reformas constitucionales) en puestos ministeriales e hizo clara su intención de ser incluido en el “núcleo de poder” gubernamental. La “Luna de Miel” que todos los presidentes gozan en sus primeros tiempos llegaba a su fin y parecía acercarse la hora en la que el PT debería abrir el juego a sus socios si es que quería mantenerlos en la coalición.

### **Fase dos: ¿Compartiendo el poder?**

Esta segunda etapa se inicia a principios de 2004 con la reforma ministerial de enero y se proyecta hasta los últimos meses de aquel año, con las elecciones municipales de octubre y el anuncio por parte de las dirigencias del PMDB y PPS del abandono de la coalición gubernamental. La característica saliente de este periodo es la disposición del PT a abrir mayor espacio político a sus socios como forma de dar más estabilidad a la coalición. El gobierno parece decidido a permitir que otras fuerzas políticas participen de la dinámica del poder aún cuando esto signifique una merma de la presencia del PT en las principales instancias políticas. Esta nueva disposición se traduce en una serie de hechos concretos: la reforma ministerial que da inicio a la segunda fase y tiene como objetivo fundamental incorporar al PMDB al primer escalón del gabinete federal, no sólo como reconocimiento a su colaboración con el Planalto sino como garantía de su compromiso con las iniciativas del gobierno (el PMDB gana los ministerios de Previsión Social y Comunicaciones); el anuncio de formación del Consejo Político como respuesta a las reiteradas quejas de parte de los partidos aliados por la falta de atención del Presidente, instancia que aseguraba reuniones relativamente periódicas entre el primer mandatario y los líderes de los partidos de la base; el compromiso por parte del Planalto de honrar una serie de promesas incumplidas con la base en materia de partidas presupuestarias parlamentarias atrasadas, y la promesa de adoptar en los ministerios y reparticiones públicas el concepto de “verticalización” (el partido político titular de un ministerio u otras instancias administrativas tiene

el derecho de nombrar los cargos políticos inferiores). Todo parecía listo para una colaboración más cercana entre el gobierno y su base.

Sin embargo, y a pesar del nuevo esquema de relación, los resultados en materia política fueron más bien decepcionantes. Sobre el principio de la fase, el estallido del caso Diniz<sup>5</sup> encontró a la coalición desarticulada y lenta de reflejos para superar rápidamente un episodio de importancia pero que no obstante no involucraba directamente a los más altos escalones del poder, mientras que la oposición aprovechaba la oportunidad para aglutinarse en torno al escándalo y atacar al gobierno. Poco tiempo después, el Congreso infringía al gobierno sus primeras “derrotas”: el rechazo a la Medida Provisional que prohibía la actividad de los bingos (que había sido implementada por Lula a raíz del caso Diniz) y la negativa del Senado (la cámara menos permeable a las iniciativas del Poder Ejecutivo) a convalidar el aumento del salario mínimo allá por junio de 2004. Pasada la primera mitad del año la actividad legislativa prácticamente se paralizó y pese a que el gobierno concentró sus esfuerzos en una serie de medidas puntuales (Ley de Quiebras, Asociaciones Público Privadas, MP del Banco Central, etc.), sólo las vio aprobadas sobre finales de año y en forma parcial. La amplia política de alianzas que el PT declamaba como principal estrategia para las elecciones municipales de octubre (el primer test electoral de Lula) tampoco tuvo expresión en la práctica, pues los acuerdos electorales fueron escasos.

Se puede argumentar que esta falta de compromiso de la base con el Presidente Lula haya tenido que ver principalmente con los malos resultados en materia económica que acompañaron buena parte del año 2004 y la consecuente baja de la popularidad del primer mandatario (que para junio de 2004 alcanzó su mínimo histórico: 54.1% de opinión positiva) en el marco además de un año electoral. Sin embargo, esto no hace más que mostrar que la coalición nunca llegó a estar sustentada en bases sólidas y era fuertemente vulnerable a los vaivenes de la política. La respuesta parece estar entonces en que el PT, pese a haber anunciado su disposición a compartir el poder, no estuvo en los hechos dispuesto a hacerlo, al menos no de forma suficiente como para mantener el compromiso de sus socios. Los partidos de la coalición no llegaron nunca a formar parte del “núcleo de poder” del gobierno, ni siquiera el PMDB participó en la mesa chica de las decisiones centrales. Las orientaciones programáticas del ejecutivo siguieron siendo patrimonio exclusivo de los hombres del PT. Las promesas de apertura de cargos en la administración pública (a través del mecanismo de la verticalización), de liberación de partidas presupuestarias y de mayor atención del Presidente a las preocupaciones de sus socios nunca fueron cumplidas y se mantuvieron dentro de las críticas más frecuentes que los líderes que los partidos aliados hacían llegar al Planalto. Durante el proceso de elecciones municipales el PT tampoco



hizo concesiones en pos de una mejor relación con sus aliados, eligió en muchos casos formulas propias y fue renuente a ceder espacios a potenciales aliados mejor posicionados. Esto generó diversos enfrentamientos locales entre fuerzas que a nivel nacional estaban del mismo lado y terminó con una serie de dirigentes regionales heridos. El fracaso del acercamiento entre el PMDB y el PT en la ciudad de San Pablo y la posterior derrota de Marta Suplicy a manos del opositor José Serra (PSDB) parece marcar la pauta de lo que fue este proceso.

Sea como fuere, luego de las elecciones municipales, el deterioro de la coalición de hizo aún más evidente y terminó con el anuncio de los directorios del PPS y del PMDB del abandono de la coalición oficial, pese a que por esos días el gobierno enviaba señales sobre la posibilidad de nuevos ministerios para sus aliados. Si bien es cierto que la decisión de PMDB debe ser sometida todavía al escrutinio de la justicia y que parte de los representantes de ambas fuerzas han ratificado su compromiso con el gobierno, la salida de estos dos partidos ilustra lo débil del lazo entre el gobierno y sus socios. El PT no pudo en esta segunda etapa de su mandato mantener la cohesión en su base.

### **Fase tres: Una nueva construcción**

Como señalamos en la introducción de este Documento, la tercer fase de las relaciones entre Lula y la coalición de gobierno está en proceso de construcción. La única certeza que hay sobre ella es la necesidad de repensar ese esquema

de relación, si es que se la quiere dotar de algún nivel de solidez y estabilidad. Los intentos previos han fracasado y nada hace pensar que este nuevo periodo que se abre ofrezca menos dificultades que los anteriores, sobre todo si se tiene en cuenta que se irán acelerando los tiempos electorales de cara a las presidenciales de 2006. Por el contrario, el nuevo escenario ofrece una limitación institucional importante para el gobierno del PT, producto de la derrota del candidato oficial a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La estructura del sistema político brasileño obliga al Poder Ejecutivo a buscar apoyo en otros actores políticos y la experiencia histórica posterior a la democratización de mediados de los 80 señala que el país sólo es gobernable a través de la formación de una amplia coalición de partidos que den sustento al Presidente en el ámbito del Congreso. El PT ganó la nominación presidencial tras la formación de una alianza electoral exitosa, pero una vez en ejercicio de la máxima instancia de poder no ha sido capaz de forjar una verdadera coalición de gobierno que se mantenga estable aun frente a los grandes movimientos de la escena pública. La responsabilidad primera en la formación de dicha coalición recae directamente en el titular del Poder Ejecutivo y de su capacidad depende el encontrar o no los medios para captar la adhesión de los muchos intereses diversos que pululan en la fragmentada morfología política brasileña. La clave parece estar en compartir el poder, formula que por el momento el PT no se ha dispuesto a adoptar en toda su profundidad.

### **Notas:**

<sup>1</sup> En la “Carta ao Povo brasileiro” del 22 de Julio de 2002, el Directorio Nacional del PT, máxima instancia institucional de la fuerza, ponía de manifiesto su compromiso con una serie pautas orientadas a traer calma a los mercados, como el pago de la deuda pública y el mantenimiento del superávit fiscal.

<sup>2</sup> GUILHON ALBUQUERQUE, José Augusto (2003): “Los desafíos del futuro gobierno de Lula”; en Foreign Affairs en Español, Enero-Marzo de 2003.

<sup>3</sup> GUILHON ALBUQUERQUE, José Augusto (2003): op. cit.

<sup>4</sup> PALERMO, Vicente (2003): “El PT desde la oposición al gobierno y las gestiones de Fernando Henrique Cardoso”; en PALERMO, Vicente (comp.): Política Brasileña Contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación; ITDT- Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

<sup>5</sup> El 13 de febrero de 2004 la revista Epoca publicó un informe en el que se revelaba que el Jefe de Asuntos Parlamentarios de la Casa Civil, Waldimiro Diniz había sido filmado recibiendo sobornos por parte del empresario clandestino de juegos Carlos Augusto Ramos, alias Carlinho Cachoeira, con el fin de financiar algunas campañas políticas, entre ellas la de Geraldo Magela (PT) que corría por la gobernación del Distrito Federal (DF) en 2002. La transacción fue filmada ese mismo año por Cachoeira, cuando Diniz era Director de Loterj (Lotería del Estado de Río de Janeiro).

**Bibliografía**

- ALLES Santiago y FRANCHINI Matías, “Lula en el poder: algunas notas sobre coaliciones y reformas en Brasil”, en Paper Latinoamericano No 3, Julio de 2003.
- CARREIRÃO, Yan (2004) “A eleição presidencial de 2002: uma análise preliminar do processo e dos resultados eleitorais”, en Revista de Sociología e Política, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Parana; No 22, junio de 2004.
- DE ALMEIDA, Paulo Roberto (2004). “Uma política externa engajada: a diplomacia do governo Lula”, en Revista Brasileira de Política Internacional. Volumen 47. Numero 1/2004, pp. 162-179.
- FALCOFF, Mark, “Brasil: El final de la luna de miel”, en Paper Latinoamericano No 14, julio de 2004.
- FLEISCHER, David, “Brazil Focus Weekly Report”, varias ediciones.
- FRANCHINI Matías, “Elecciones municipales en Brasil: El primer test electoral de Lula”, en Paper Latinoamericano No 15, agosto de 2004.
- GERVASONI, Carlos, “Lula y la corrupción: Lecciones para los gobiernos de centro-izquierda”, en Paper Latinoamericano No 10, marzo de 2004.
- GUILHON ALBUQUERQUE, José Augusto (2003): “Los desafíos del futuro gobierno de Lula”; en Foreign Affairs en Español, Enero- Marzo de 2003.
- PALERMO, Vicente (2003): “El PT desde la oposición al gobierno y las gestiones de Fernando Henrique Cardoso”; en PALERMO, Vicente (comp.): Política Brasileña Contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación; ITDT- Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
- PANIZZA, Francisco, “Política y economía de Brasil contemporáneo”, en PALERMO, Vicente (comp.): Política Brasileña Contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación; ITDT- Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
- Panorama Regional: Brasil, en Paper Latinoamericano, varias ediciones.



## *Ganador del 2005 Templeton Freedom Award Grant for Institute Excellence*

### **MISIÓN**

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires, Argentina, se constituyó como Fundación el 26 de febrero de 2003 con el objetivo de promover el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y las libertades económicas en los países de la región. Para tal fin, CADAL realiza actividades de análisis, investigación y difusión a través de dos proyectos especiales y de la implementación de varios programas en cuatro áreas: Política Latinoamericana, Fortalecimiento Democrático, Economía y Estado de Derecho, y Desarrollo y Comunicación Institucional.

### **ORÍGENES**

La interpretación de la crisis argentina del 2001/2002 y su impacto regional, las debilidades institucionales en varios países y, en general, el clima de opinión pública anti-mercado en Latinoamérica luego de las reformas económicas de las décadas de los 80 y 90, fueron algunos de los motivos que llevaron a la constitución del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. También se tuvo en cuenta la inexistencia de una ONG pro democracia y mercado que trabaje combinando análisis, investigación y difusión sobre temas políticos y económicos con una visión regional.

### **CONTRAPARTES**

Las siguientes entidades colaboran en la realización de las actividades de CADAL: Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (Capítulo Uruguayo), Atlas Economic Research Foundation (Estados Unidos), Center for Democratic-Liberal Studies (Serbia), Center for International Private Center (Estados Unidos), Comisión Argentina Pro Derechos Humanos en Cuba (Argentina), Directorio Democrático Cubano (Estados Unidos), Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina), IDEAR Mendoza (Argentina), Instituto de Ciencia Política (Colombia), Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina (Buenos Aires, Argentina), Konrad Adenauer Stiftung (Representación en Argentina), People In Need Foundation (República Checa), Probidad (El Salvador), Timbro (Suecia) y Universidad ORT (Uruguay)

### **AUTORIDADES Y STAFF**

#### **CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Presidente: Pedro Isern Munné. Secretaria: María Reviriego. Tesorera: Emilce Grimi.

#### **COMITÉ EJECUTIVO**

Director General: Gabriel Salvia. Subdirector: Hernán Alberro.

#### **CONSEJO ACADÉMICO**

Carlos Gervasoni (Universidad de Notre Dame, Estados Unidos), Isidoro Hodara (Universidad ORT, Uruguay), Jorge Marshall (Expansiva, Chile) y Mauricio Rojas (Instituto Timbro, Suecia).

#### **STAFF**

Área Fortalecimiento Democrático: Fernando Ruiz, Mariel Julio, Mercedes Llano y Alexander Güvenel.

Área Política Latinoamericana: Matías Franchini, Santiago Alles y Verónica Domínguez Pousada.

Área Desarrollo y Comunicación Institucional: Antonela Scocco.

Representante en Uruguay: Nelson Fernández

Coordinador de Programas en Uruguay: Carlos Alvarez.

Área Administración y Finanzas: Marisa Divitto.

Webmaster: Sergio Casais.